

Clases medias negras en Colombia

Estrategias discursivas y de movilización ante las crisis de legitimidad política y social

Mara Viveros Vigoya

■ Doi: 10.54871/ca25ac0e10

El paro nacional de 2021: catalizador de demandas estructurales en Colombia

El 28 de abril de 2021, terminé de escribir el manuscrito del libro *El oxímoron de las clases medias negras* y lo envié a los colegas de CALAS para iniciar el proceso de revisión de pares (Viveros Vigoya, 2021 y 2023). Estábamos en plena pandemia, con millones de contagios y miles de muertos, y el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria para recoger el dinero necesario para desarrollar las políticas sociales que requirió para responder a los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Esta reforma que buscaba aumentar impuestos a productos básicos y servicios, desató masivas protestas en ciudades y zonas rurales. La exigencia del retiro de esta reforma se convirtió rápidamente en el detonante de un paro nacional histórico, en el que hombres y mujeres jóvenes, organizaciones de indígenas y afrodescendientes y sindicatos reivindicaron en paralelo asuntos coyunturales como exigencias hechas en luchas sociales del pasado.

No era la primera movilización reciente en Colombia: entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, grandes protestas ya habían

estallado contra la política económica neoliberal del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, el Paro Nacional de 2021 sí ha sido hasta ahora, la movilización social más grande y prolongada de Colombia, superando las protestas masivas de 2019. En 2021, las protestas en Colombia, que se prolongaron por más de dos meses, frenaron la reforma tributaria y marcaron un cambio histórico al posicionar a la izquierda como favorita para las elecciones de 2022. Entre las principales demandas destacaron la educación superior gratuita y reformas al sistema de salud, recordando las movilizaciones chilenas de 2019. Este movimiento se convirtió en un hito para las luchas sociales del país.¹

Las movilizaciones de 2021 en Colombia fueron convocadas inicialmente por el Comité Nacional de Paro (CNP), organizaciones estudiantiles y movimientos sociales, con la participación de diversos sectores como indígenas, campesinos, comunidades negras, estudiantes, artistas y colectivos feministas, entre otros. Aunque el CNP representó a sindicatos y gremios nacionales, muchas comunidades se autogestionaron de manera autónoma, organizando actividades como asambleas, jornadas pedagógicas y acciones culturales. Además, surgieron actores clave como las *Primeras Líneas* y comités locales, que ganaron reconocimiento en varias ciudades por su rol en las protestas (Celis Ospina et al., 2023).

El gobierno defendió la reforma como necesaria para mitigar los efectos de la pandemia, y los manifestantes argumentaron que afectaría principalmente a las clases medias, ya vulnerables por el desempleo y la informalidad laboral. El discurso público destacó dos visiones sobre las clases medias: una *visión desde arriba*, que las posicionaba como un grupo estabilizador para la democracia, y una *visión desde abajo*, que expuso su fragilidad y las limitaciones de su movilidad económica. La pandemia reveló las débiles bases

¹ A diferencia del estallido social en Chile, en Colombia las protestas ocurrieron un año después del inicio de la pandemia, cuando la vacunación aún era incipiente. Este estallido dejó un número de víctimas entre los manifestantes sin precedentes en comparación con protestas recientes en otras partes del mundo (Celis, 2023).

de su integración, exacerbando su precariedad y empujando a millones a la pobreza.

En este contexto, las clases medias racizadas, compuestas mayoritariamente por sectores afrodescendientes, indígenas y mestizos de piel oscura, jugaron un papel relevante en las protestas, al lado de los demás sectores sociales implicados.² Estos grupos, especialmente en ciudades como Cali, visibilizaron tensiones raciales y cuestionaron narrativas meritocráticas que legitimaban el poder de las clases dominantes. Su protagonismo, articulando demandas conjuntas con sectores populares en busca de justicia social, dismanteló la idea de las clases medias como un grupo homogéneo y apolítico.

Clases medias racizadas: entre vulnerabilidad y resistencia

El concepto de *clases medias negras* en Colombia es complejo debido al racismo estructural que persiste en el país, donde la población afrodescendiente enfrenta las peores condiciones de vida y un acceso limitado a posiciones de poder. A lo largo del siglo XX, el mestizaje se presentó como una ideología igualitarista que negaba el racismo, dificultando su reconocimiento. Sin embargo, las luchas afrocolombianas evolucionaron, pasando de discursos igualitarios a enfoques étnicos y culturales, impulsados por procesos como el reconocimiento constitucional del multiculturalismo en los años noventa.

² Distingo entre “racializada” y “racizada”. El término “racializada” describe a personas o grupos socialmente categorizados y tratados según construcciones sociales de raza, lo que crea jerarquías raciales que benefician a grupos dominantes, como los “blancos”. Por otro lado, Colette Guillaumin (1972) define “racización” como el acto mediante el cual un grupo dominante define y categoriza a un grupo subordinado como raza, asignándole un estatus minoritario. Así, una clase social racizada enfrenta desigualdades, estigmas y discriminaciones basadas en la apariencia, origen étnico o características físicas de quienes la componen.

En Colombia, las clases medias negras oscilan entre la vulnerabilidad y la resiliencia, enfrentando las tensiones de un racismo estructural que atraviesa sus trayectorias sociales. Mientras algunas han adoptado una identidad etnizada vinculada al Pacífico, otras, urbanas, se enfocan en la lucha por derechos y oportunidades, sin enfatizar singularidades culturales. Eventos como la Conferencia de Durban en 2001, consolidaron las luchas antirracistas, pero también revelaron tensiones entre el empoderamiento colectivo y la cooptación institucional. Estas dinámicas son clave para entender las transformaciones sociales, políticas y culturales de estas clases. Aunque su ascenso social refleja logros significativos, su fragilidad estructural las hace especialmente vulnerables a crisis económicas y políticas como la pandemia del COVID, que empujó a millones hacia la pobreza, exacerbando desigualdades y barreras históricas.

La pandemia evidenció la precariedad de su movilidad social: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la clase media en Colombia se redujo en 2,17 millones de personas entre 2019 y 2020, con Cali como una de las ciudades más afectadas. Este retroceso golpeó particularmente a los hogares afrodescendientes, cuyos avances materiales se vieron revertidos (DANE, 2021). Durante el paro nacional de 2021, las clases medias enfrentaron los efectos de la precarización económica, mientras diversas fracciones, como docentes y estudiantes, participaron activamente en movilizaciones que cuestionaron tanto las políticas gubernamentales como las narrativas meritocráticas que las caracterizaban como beneficiarias pasivas del sistema. En ciudades como Cali, destacaron por articular demandas dirigidas a desmontar jerarquías raciales y sociales, además de construir alianzas con sectores populares, consolidándose como actores clave en la lucha por la justicia social.

Frente a la narrativa oficial del gobierno, que idealizaba a las clases medias como defensoras del orden y la estabilidad, las movilizaciones revelaron una perspectiva alternativa, marcada por la conciencia de su vulnerabilidad y su convergencia con demandas

populares por derechos fundamentales. Este protagonismo desafió las representaciones de las clases medias como un bloque homogéneo, destacando su capacidad transformadora en la construcción de un proyecto político que replantee las estructuras de poder en Colombia.

Cali como epicentro del descontento racial y social

Cali ha sido un epicentro del descontento racial y social en Colombia, marcado por profundas desigualdades estructurales y una persistente segregación racial. El crecimiento poblacional, impulsado por el desplazamiento forzado debido a guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico, ha superado la capacidad de la ciudad para generar empleo, intensificando la exclusión social en zonas como el oriente y las laderas (Grueso, 2021). En estos sectores, la segregación residencial sigue siendo una característica visible, y los estereotipos racistas perpetúan desigualdades hacia las comunidades afrodescendientes e indígenas.

Aunque en otras regiones del mundo la segmentación racial puede atravesar todas las clases sociales, en Cali, como en otras ciudades colombianas, la segregación afecta de manera particular a las clases medias negras. Estas enfrentan el mayor grado de aislamiento residencial, viéndose percibidas como *forasteras* y *no deseadas* en barrios de clase media predominantemente blanco-mestizos. En contraste, en los barrios populares, las comunidades negras y blanco-mestizas suelen convivir de manera más armoniosa, lo que fortalece redes urbanas de sociabilidad. Sin embargo, la polarización residencial y los intereses divergentes entre las poblaciones de estos barrios han generado y fomentado tensiones raciales, creando barreras que restringen el acceso igualitario a recursos, servicios y oportunidades.

La segregación residencial no solo define la ubicación geográfica, sino que también limita el acceso a educación, empleo y

movilidad social, perpetuando la precariedad en barrios marginalizados y restringiendo el reconocimiento de las clases medias negras. Incluso quienes mejoran su situación económica enfrentan estigmas asociados a su origen, lo que refuerza su exclusión de los círculos privilegiados. Más allá de lo material, estos patrones consolidan una segmentación simbólica y política que reduce la visibilidad e influencia de estas comunidades.

El paro nacional de 2021 expuso las fracturas sociales y raciales de Cali, convertida en epicentro de las manifestaciones. Lideradas por comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, estas protestas denunciaron desigualdades estructurales en medio de una intensa represión. La experiencia organizativa de colectivos en la ciudad, el Cauca y la región del Pacífico fue crucial en la consolidación de los puntos de resistencia, articulando sus demandas con sus historias de lucha y prácticas culturales.

En este contexto, la pedagogía emergió como una herramienta de acercamiento y transformación. A través de la música, talleres artístico-culturales y círculos de palabra, se construyeron relaciones horizontales de saberes que vincularon a la universidad con los territorios y fortalecieron el diálogo intergeneracional. Estas iniciativas no solo consolidaron las resistencias, sino que también promovieron el aprendizaje mutuo como base para articular demandas sociales más amplias (Jaramillo Salgado 2023).

La llegada de la Minga, integrada por pueblos indígenas del Cauca y líderes afrodescendientes, desató reacciones violentas en los barrios de clase alta del sur de Cali, donde grupos armados civiles atacaron a los manifestantes el 9 de mayo de 2021, impulsados por discursos racistas. Este enfrentamiento reflejó la división entre quienes apoyaban el paro y los sectores de élite que lo rechazaban.

La Minga, entendida como una estrategia de resistencia indígena, ha funcionado como una herramienta de presión desde la Constitución de 1991, a través de bloqueos en la carretera Panamericana contra diversos gobiernos. La violencia de mayo de 2021 expuso tanto el racismo estructural como la desconexión del gobierno

frente a las demandas sociales que motivaron el paro (Cuestión Pública, 2021).

Esta violencia fue especialmente letal para los jóvenes afrodescendientes de barrios empobrecidos, que fueron las principales víctimas de homicidios y desapariciones. Según Amnistía Internacional, 82 afrodescendientes fueron asesinados, con una concentración de violencia en los sectores más empobrecidos. Estas cifras, presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayan la urgencia de recopilar datos por etnicidad y raza para visibilizar las desigualdades y combatir el racismo estructural y la violencia policial. El estallido social también evidenció la necesidad de un nuevo contrato social para abordar las profundas desigualdades del país, desafiando la supuesta estabilidad promovida por el gobierno.

Puerto Resistencia: creatividad y movilización en clave interseccional

Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena, pasó de ser famoso por sus sabrosas morcillas a convertirse en un símbolo de lucha social durante el paro nacional en Colombia. Ubicado en el oriente de Cali, este espacio, con raíces en la organización obrera de los años setenta en el barrio Unión de Vivienda Popular, articuló demandas laborales, ambientales e institucionales, consolidándose como epicentro de creatividad y resistencia. En este lugar, convergieron jóvenes activistas afrodescendientes y mestizos, feministas negras y grupos lgbtiq+, artistas y jóvenes blancos-mestizos de clases medias empobrecidas. Miles de habitantes de esta ciudad marcada por la fragmentación, se unieron en ollas populares y proclamas para alzar su voz contra la pobreza, la desigualdad y la violencia. Aunque no hay una única interpretación sobre lo que pasó, compartían un objetivo común: enfrentar las profundas desigualdades estructurales y el racismo sistémico que caracterizan la ciudad.

Puerto Resistencia fue más que un punto de protesta; se convirtió en un espacio de duelo, solidaridad y creación artística. La olla comunitaria, centro de diálogo y construcción colectiva, alimentó tanto cuerpos como ideas. Allí se lloró a los jóvenes asesinados, se denunció la brutalidad policial y el paramilitarismo urbano, y se alzaron voces contra la exclusión impulsada por sectores privilegiados de Cali. Este lugar, símbolo de indignación y esperanza, inspiró expresiones artísticas que trascendieron las calles, amplificadas por plataformas digitales. La pandemia intensificó las frustraciones, actuando como catalizador de nuevas formas de resistencia política y colectiva que se pusieron a prueba durante el paro de 2021.

El Monumento a la Resistencia, erigido durante las protestas de 2021, es hoy un símbolo de memoria y lucha. De 10 metros de altura, representa una mano levantada con el cartel *Resiste* en homenaje a las víctimas del estallido social. Incluye escudos de la Primera Línea, retratos de jóvenes asesinados y la imagen del periodista Alberto Tejada. La comunidad movilizó materiales y completó la obra en dos semanas. Inaugurado el 13 de junio de 2021, el 27 de octubre de 2024 se anunció que se entregaría el expediente al Consejo Nacional de Patrimonio para su declaración como patrimonio cultural, en medio de controversias y resistencias en sectores de población caleña vinculados a la derecha política (Guíza, Daniela, 2023 y 2024). Puerto Resistencia simboliza la unión de sectores marginados en una contra-narrativa que desafió el orden establecido. Este espacio, mezcla de arte y activismo, sigue siendo un testimonio de resistencia y un faro de cambio frente a la exclusión estructural.

Surgimiento de nuevos sujetos políticos en el contexto del paro nacional

El Paro Nacional de 2021 permitió la emergencia de una nueva generación de actores políticos. Jóvenes mujeres y hombres se

politizaron y reclamaron su capacidad política autónoma. Esta movilización puso en el centro del debate público temas como el modelo económico, la violencia policial, las violencias basadas en género y sexualidad, aspectos que habían sido marginados en el Acuerdo de Paz. En este contexto, las y los jóvenes, uno de los grupos más afectados por la precariedad laboral y la falta de oportunidades, asumieron un papel protagónico. Con un compromiso espontáneo y autónomo, enfrentaron la represión estatal y tomaron riesgos significativos, consolidando lo que podría llamarse una nueva *juventud activista*.

Estos jóvenes, a la vez impulsores y principales víctimas de las revueltas, recurrieron a la ocupación del espacio público como medio para visibilizar sus demandas. Las calles se convirtieron en escenarios de encuentro y resistencia, donde se llevaron a cabo actos simbólicos, entre ellos la resignificación de espacios, como Puerto Resistencia, y la remoción de monumentos que encarnaban ideologías coloniales y opresivas. Tal como ocurrió en Chile y Colombia, estas acciones reflejaron una lucha compartida contra un modelo neoliberal que precariza la vida humana y no humana (Amador y Muñoz, 2021).

La respuesta estatal a estas movilizaciones estuvo marcada por la violencia y la represión, con cuerpos policiales como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y los Carabineros cometiendo violaciones de derechos humanos que reflejaron exclusiones por generación, género, clase y etnia. Sin embargo, estos escenarios también revelaron una fuerte capacidad de resistencia, especialmente en las prácticas feministas y en las juventudes, que desarrollaron nuevas formas de participación alejadas de los enfoques tradicionales. Inspiradas en la potencia como alternativa de poder, sus acciones desplazaron los límites impuestos, afirmando un contrapoder basado en la invención común, el disfrute colectivo y la ampliación de lo posible (Gago, 2019). Enfrentando la precarización, el racismo y el sexismo del modelo neoliberal, estas movilizaciones demostraron su agotamiento mientras exploraban nuevas

alternativas políticas y culturales a través de tecnologías digitales y redes colaborativas.

El feminismo, en sus diversas corrientes, desempeñó un papel crucial en estas movilizaciones, transformando tanto el pensamiento político como las prácticas activistas. Las resistencias feministas adoptaron nuevas formas, como las que se expresaron en la ola de solidaridad que suscitó el caso de la joven violentada por agentes de la policía el 13 de mayo de 2021 en Popayán. Esta indignación colectiva se manifestó en actos simbólicos, como el bordado de nombres de víctimas y las asambleas populares. Además, mujeres de sectores populares, conocidas como las “mamás de primera línea,” hicieron visible la intersección entre opresión de género, raza y clase al asumir un rol activo en la protección de manifestantes.

En un contexto marcado por fragmentaciones, la propuesta de un feminismo sin fronteras, como lo plantea Chandra Mohanty (2020), resalta la importancia de resistir las opresiones raciales, patriarcales y heterosexistas a través de alianzas políticas diversas y una solidaridad feminista transformadora. Al resaltar la interdependencia de la vida y el trabajo de cuidado invisibilizado, asumido principalmente por mujeres marginadas, este enfoque proporciona herramientas clave para analizar y transformar las dinámicas de poder y privilegio. Su influencia se hizo evidente en las movilizaciones juveniles y feministas del Paro Nacional, donde las luchas articularon resistencias locales y ampliaron los horizontes hacia una justicia más inclusiva y un cambio estructural profundo.

El Paro Nacional también impactó la política electoral. En las elecciones presidenciales de 2022, el voto juvenil fue determinante, marcando un deseo colectivo de cambio estructural. Iniciativas como el movimiento *Estamos Listas*, surgido en 2019, visibilizaron las demandas feministas en el escenario político, logrando que estas fueran centralizadas en la agenda presidencial de 2022. La candidatura de Francia Márquez representó un punto de inflexión, consolidando estas demandas en el corazón de la política nacional.

El protagonismo de las juventudes y los feminismos durante el Paro Nacional representó una transformación significativa en el panorama político colombiano. Sin embargo, este despertar político no surgió de manera aislada. Como se analizará en el siguiente apartado, los colectivos afrodescendientes, con su lucha por visibilizar los desafíos y avances de las luchas antirracistas, también desempeñaron un papel fundamental en la ampliación de las bases de resistencia y en la construcción de un país más inclusivo y diverso.

Desafíos y avances de las luchas antirracistas en la política colombiana

El paro nacional de 2021, sumado a los efectos de la pandemia de COVID-19, la polarizada campaña presidencial de 2022 y el triunfo de Gustavo Petro como candidato del Pacto Histórico, configuraron un nuevo escenario político en Colombia. Este momento histórico marcó un punto de inflexión que abrió caminos hacia una mayor participación ciudadana y articuló discursos feministas, antirracistas y ambientalistas con las demandas de sectores históricamente marginados. Las protestas evidenciaron el descontento de las comunidades frente a la violencia estructural, denunciando el asesinato de líderes ambientales, la imposición de megaproyectos extractivos y la falta de respeto por las decisiones comunitarias. Estas movilizaciones también resaltaron el rol central de las clases medias negras y sus tensiones internas en un contexto de racismo estructural persistente.

La complejidad de las trayectorias de las clases medias negras en Colombia ha sido ampliamente documentada, como lo muestran los estudios de Urrea Giraldo (2011, 2021) y Viveros Vigoya (2021, 2023). Aunque la conciencia sobre el racismo ha aumentado en las poblaciones negras, no ha surgido un activismo antirracista generalizado. Las facciones de clase media negra cercanas al poder han desalentado posturas disruptivas. Por otra parte, el ascenso

social, individualizado, no ha generado un impacto redistributivo, aumentando las distancias entre el sector más privilegiado y la mayoría afrocolombiana, desplazada por violencia política y económica. Estas contradicciones reflejan las ambigüedades del discurso multicultural en un contexto neoliberal.

En Bogotá, donde la población afrodescendiente representa apenas el 1,5 %, esta es más heterogénea: una minoría logra ascender a clases medias acomodadas, mientras que un grupo considerable se ubica en las clases medias bajas. En contraste, Cali, con una mayor proporción de afrodescendientes, muestra una polarización más marcada, con pocos afrodescendientes en las clases medias acomodadas y una mayoría en condiciones de pobreza extrema. Esta situación refleja el impacto del racismo estructural en la movilidad social y las dificultades para consolidar logros individuales en entornos que siguen segregados racialmente.

El paro nacional también evidenció un patrón de violencia diferenciada contra afrodescendientes, caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y prácticas racistas. Estas agresiones, dirigidas especialmente contra jóvenes, mujeres y personas afro-LGBT, intensificaron las desigualdades históricas, destacando la necesidad de construir un “nosotros popular plural”. Este enfoque, promovido por líderes como Francia Márquez, busca trascender las identidades raciales para unir a diversos sectores en torno a la lucha contra la exclusión y el abandono estatal.

En 2022, por primera vez en Colombia, cuatro de los siete candidatos a la Vicepresidencia pertenecían a la población afrodescendiente, lo que generó un debate sobre si esto representaba un cambio político real o una estrategia oportunista. Este fenómeno, inédito en la campaña electoral, puso sobre la mesa el racismo y abrió un espacio para discutir problemáticas socioculturales que, durante décadas, estuvieron ausentes de la agenda electoral debido al conflicto armado (Pardo, 2022). Sin embargo, como señaló Diego Lucumí (2022), tener representación en las altas esferas del poder no asegura un cambio significativo; lo esencial es “profundizar en

temas como educación, empleo y salud para atender las necesidades de la población”. Aunque el incremento de la participación política de las minorías es un hito, también ha provocado un aumento en los ataques racistas, con 569 incidentes registrados entre abril y mayo de 2022, de los cuales 561 fueron dirigidos a la candidata Francia Márquez, según el Observatorio de Discriminación Racial.

La vicepresidencia de Francia Márquez, una figura disruptiva que emergió del activismo comunitario y ambiental, ha sido un acontecimiento en la política colombiana. Su elección no solo marcó un avance hacia una representación más diversa, sino que también reveló las tensiones persistentes de un sistema socioracial excluyente. Durante su campaña, Márquez fue blanco de ataques clasistas, racistas y sexistas, reflejo de las resistencias que enfrenta su liderazgo. Aunque su lema *Vivir Sabroso* buscaba reivindicar la dignidad y el derecho a una vida plena, fue tergiversado por sectores conservadores, que lo asociaron con consumismo y privilegios.

La elección de Francia Márquez y la llegada del gobierno de izquierda han impulsado la presencia de afrodescendientes en altos cargos, como ministerios, viceministerios y embajadas, reflejando el ascenso de las clases medias negras en la administración pública. Sin embargo, el impacto de la presencia de Francia Márquez en el gobierno ha sido limitado por la falta de claridad en el rol de la Vicepresidencia y las dificultades administrativas para gestionar sus programas en el Ministerio de Igualdad y Equidad, a pesar de que su liderazgo y activismo la condujeron a este logro político.

La fuerte centralización de las negociaciones y decisiones en torno al presidente, ha reducido el espacio para que otros liderazgos se consoliden (Hylton y Tauss, 2023) y ha restringido su capacidad para conectar plenamente los movimientos sociales con el Gobierno. Por otra parte, un análisis computacional de 94.201 tuits publicados entre el 6 de agosto de 2022 y el 7 de abril de 2023 sobre el desempeño de Francia Márquez revela que dos de los cuatro temas analizados tenían un tono mayoritariamente negativo. En particular, el tema más presente muestra un claro tono racista, más

allá de la crítica a su gestión, lo que sugiere indicios de discurso de odio, con elementos de racismo y sexismo intersecados, reflejando las tensiones sociales latentes en Colombia.

El ascenso de Francia Márquez tiene paralelismos con el de Barack Obama en Estados Unidos, donde la inclusión política de figuras afrodescendientes en posiciones de poder genera tanto avances como resistencias. En el caso de Obama, su elección como presidente representó un logro para la comunidad afroamericana, pero también provocó reacciones adversas que, en parte, facilitaron el ascenso de Donald Trump. Este fenómeno pone de manifiesto cómo la representación de afrodescendientes en posiciones de poder desafía estructuras sociales profundamente arraigadas, evidenciando tanto su potencial transformador como los riesgos de retrocesos cuando las élites conservadoras responden con ataques y polarización

Reflexiones finales: hacia un nuevo contrato social, sexual y racial en Colombia

La inclusión de líderes afrodescendientes en el poder revela tensiones entre el cambio progresista y la reacción conservadora. El desafío ahora es convertir los avances simbólicos en cambios estructurales duraderos. Para las clases medias negras en Colombia, este desafío definirá si sus logros se alinean con un proyecto colectivo que enfrente el racismo estructural y la desigualdad, o si se mantienen en dinámicas individualistas.

La experiencia de Francia Márquez y el contexto político actual invitan a reflexionar sobre cómo consolidar una lucha inclusiva que trascienda barreras raciales y económicas, y sobre el papel crucial de un *nosotros plural* en la construcción de un país más equitativo. La trayectoria de la representación política afrodescendiente en Colombia, ejemplificada por el liderazgo de Francia Márquez y la creciente visibilidad de las clases medias racizadas, subraya la

necesidad de un nuevo contrato social, sexual y racial. Este pacto debe confrontar el racismo estructural que permea las instituciones y la sociedad colombiana, garantizar justicia social y equidad, y reparar las desigualdades históricas que han marginado a amplios sectores de la población. En esencia, se trata de reconocer la diversidad étnico-racial del país mientras se garantiza una clara redistribución de recursos y oportunidades de manera equitativa, y se asegura la representación plena de todas las voces en la construcción de un proyecto nacional mas justo e inclusivo.

El paro nacional de 2021 evidenció el poder transformador de los sectores históricamente marginados, cuyas demandas van más allá de mejoras económicas inmediatas para exigir una reconfiguración profunda del sistema político y social. Este movimiento puso en el centro la necesidad de superar las desigualdades estructurales, no solo en términos de redistribución de recursos, sino también en el reconocimiento y representación de sectores históricamente excluidos. En este marco, algunos sectores de clases medias racizadas emergieron como actores políticos clave, articulando demandas populares y desafiando las estructuras de exclusión que perpetúan la desigualdad.

Sin embargo, este avance enfrenta resistencias significativas. El racismo estructural sigue operando como un mecanismo de deslegitimación del liderazgo afrodescendiente, reforzando barreras institucionales y políticas que limitan su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. Las lideresas negras, por ejemplo, han ganado visibilidad en espacios políticos, académicos y sociales, pero esta presencia no siempre se traduce en un poder capaz de incidir en las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. A esto se suman los discursos discriminatorios y las amenazas que buscan desincentivar su liderazgo, evidenciando la necesidad de políticas que no se limiten únicamente a medidas puntuales de políticas sociales focalizadas, sino que apunten a desarrollar una política social ambiciosa e integradora, capaz de enfrentar las

raíces del racismo estructural e institucional (Mosquera Moreno y Murillo, 2023).

En Colombia, persiste la idea de que el racismo es inexistente debido a su identidad mestiza, una narrativa reforzada por la Constitución de 1991 con su reconocimiento del país como multiétnico y pluricultural. Sin embargo, los cambios culturales a diferencia de las transformaciones legales son más lentos, complejos y difíciles de consolidar. Esta disonancia ha permitido que el racismo estructural permanezca, a pesar de los esfuerzos de movimientos indígenas, negros y afrodescendientes, que han trabajado arduamente para visibilizar las desigualdades raciales y cuestionar el ordenamiento racial-colonial del país (Gómez Correal, 2022)

En este contexto, las discusiones públicas sobre temas estructurales como la reforma agraria han sacado a la luz las conexiones entre racismo, desigualdad y violencia. Aunque el Acuerdo de Paz y la desmovilización de las FARC abrieron un camino hacia la transformación social, las violencias persisten: masacres, desplazamientos, desapariciones y homicidios políticos continúan afectando a muchas regiones. Si bien el presidente Petro ha buscado impulsar la reforma agraria como un paso crucial para abordar estas desigualdades históricas, ha enfrentado una feroz resistencia de grandes terratenientes y ganaderos, a menudo en complicidad con grupos armados ilegales y sectores del Estado (Hylton y Tauss, 2023). Este panorama evidencia cómo el poder político sigue vinculado a la propiedad de la tierra, perpetuando un sistema de exclusión que afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

En agosto de 2023, tras un año de Gobierno, se firmaron dos decretos fundamentales en beneficio de las comunidades negras, raizales y palenqueras, desarrollando por primera vez la Ley 70 de 1993. Esta ley, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva, la protección de la identidad cultural y del medio ambiente, fomenta el desarrollo económico y social para reducir las brechas de desigualdad. Los decretos abordan aspectos relevantes como el

reconocimiento de derechos para la explotación agroambiental de los territorios y la regulación de la explotación minera, asegurando derechos al pueblo afrodescendiente sobre las minas y sus territorios.

Para construir una Colombia realmente incluyente, la representación política en altas esferas no es suficiente. Es preciso un esfuerzo sostenido para dismantelar las estructuras de desigualdad y discriminación. Un nuevo contrato social, sexual y racial debe dignificar la diversidad étnica y cultural, reconocer las contribuciones históricas de las comunidades afrodescendientes e indígenas a la sociedad colombiana y garantizar una redistribución equitativa de recursos y oportunidades con enfoque racial y de género. Esto requiere reformas políticas y económicas, pero también un cambio cultural que transforme la percepción de los derechos, dejando de considerarlos un privilegio para asumirlos como una cuestión de justicia y reparación.

Las clases medias racizadas desempeñan un papel clave en esta coyuntura política, al expandir el significado de la ciudadanía y el sentido de pertenencia política. Integradas por indígenas, afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados, ocupan una posición ambigua: cercanas a los movimientos sociales, pero con acceso a espacios institucionales. Esto les ha permitido ser interlocutoras de estos gobiernos e incluso asumir cargos públicos, como en Bolivia, Brasil y Colombia, ganando reconocimiento social y político, aunque sin eliminar las formas de exclusión y racialización que limitan su impacto.

Su doble condición –entre reconocimiento y exclusión– las convierte en actores estratégicos para impulsar un nuevo contrato social, sexual y racial que combine redistribución económica con reconocimiento político y cultural. Sin embargo, su presencia en el poder no garantiza una transformación estructural. A menudo, su ascenso se enmarca en la lógica neoliberal, presentándolas como casos individuales de éxito en lugar de expresiones y resultado de procesos colectivos. Además, cuando intentan liderar cambios de

fondo, enfrentan ataques racistas y sexistas que buscan deslegitimar sus esfuerzos y restringir su capacidad de gobernar, como en el caso de la vicepresidenta Márquez.

Esto me lleva a concluir con algunas preguntas clave que invitan a la reflexión: ¿Cómo lograr que la diversidad racial, étnica y de género sea un principio constitutivo de la democracia y no sólo un recurso simbólico? ¿Cómo evitar que la participación política de las clases medias racizadas termine reproduciendo las mismas dinámicas de exclusión que busca transformar? ¿Qué condiciones son necesarias para que puedan consolidarse como sujetos políticos colectivos? Estas cuestiones son fundamentales para repensar su papel en la disputa por el sentido y el futuro de la democracia en América Latina.

Bibliografía

Bryant, Nick (2 de marzo de 2016). Primarias en EE.UU.: por qué no debe sorprendernos el ascenso de Donald Trump. *BBC NEWS Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160302_eeuu_elecciones_ascenso_donald_trump_bd

Celis Ospina, Juan Carlos (coordinador) (2023). *Estallido social 2021. Expresiones de vida y resistencias*. Bogotá: Siglo Editorial.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2024). El pueblo en las calles: memorias de resistencia y represión en el estallido social de 2021. Volumen 1. CNMH.

Cuestión Pública (26 de mayo de 2021). Paso a paso: así fue el tiroteo del 9 de mayo al sur de Cali. <https://cuestionpublica.com/paso-a-paso-asi-fue-el-tiroteo-del-9-de-mayo-al-sur-de-cali/>

Gago, Verónica (2019). *La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón.

Gómez Correal, Diana (3 de mayo de 2022). Racismo estructural y racismo actual: a propósito del mes de la herencia africana y del día de la Afrocolombianidad. *Boletín 129, Cider*. <https://cider.uniandes.edu.co/es/boletines/boletin-129/Racismo-estructural-y-racismo-actual-afrocolombianidad>

Grueso, Delfín Ignacio (2021). Las raíces del descontento social en Cali. *Razón pública*. <https://razonpublica.com/las-raices-del-descontento-social-cali/>

Guillaumin, Colette (1972). L'Idéologie raciste: genèse et langage actuel. La Haye: Mouton. *L'Homme et la société*, (27).

Güiza Mesa, Daniela (2023). Valor y significado del Monumento a la Resistencia de Cali desde una perspectiva del patrimonio cultural. Universidad de los Andes. <http://hdl.handle.net/1992/70369>

Jaramillo Salgado, Diego (2023). Venimos manchando desde lejos. En Juan Carlos Celis (coord.), *Estallido social 2021. Expresiones de vida y resistencias* (pp. 233-263). Bogotá: Siglo Editorial.

Hylton, Forrest y Tauss, Aaron (2023). Colombia en tiempos de Petro. Expectativas de cambio y riesgo de “empate catastrófico”. *Nueva sociedad*, 305, 74-88. <https://nuso.org/articulo/305-colombia-tiempos-de-petro/>

Lucumí, Diego (21 de mayo de 2022). Vicepresidente afro: ¿un nuevo liderazgo? *Noticias*. <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/desarrollo-regional/vicepresidente-afro-un-nuevo-liderazgo>

Mohanty, Chandra T. (2020). *Feminismo sin fronteras. Decolonizar la teoría, practicar la solidaridad*. México: Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

Moreno Mosquera, Kelys Zulay, Murillo, David (16 de octubre de 2023). Las afro-reparaciones: ¿Qué son y por qué urge implementarlas? *Dejusticia*. <https://www.dejusticia.org/column/las-afro-reparaciones-que-son-y-por-que-urge-implementarlas/#:~:text=Por%20medio%20de%20las%20afro,los%20descendientes%20de%20sus%20v%C3%ADctimas>.

Pardo, Daniel (17 de mayo de 2022). Cómo se ven el racismo y el protagonismo de candidatos negros en las elecciones desde los lugares más afro de Colombia. *BBC NEWS Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61431677>

Urrea Giraldo, Fernando (2011). La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo largo del siglo XX y la primera década del XXI. *Revista de Estudios Sociales*, 39, 24- 41.

Urrea Giraldo, Fernando et al. (2021). Algunos factores desencadenantes del levantamiento popular en Cali y su región metropolitana. *Pensar la resistencia mayo de 2 de 2021 en Cali y Colombia*, 6, 167-182.

Viveros Vigoya, Mara (2021). *El oxímoron de las clases medias negras: Movilidad social e interseccionalidad en Colombia*. Guadalajara: CALAS/Editorial Universidad de Guadalajara.

Viveros Vigoya, Mara (2023). *Breaking the Boundaries of the Colombian Socio-Racial Order. Black Middle Classes through an Intersectional Lens*. Lanham: Lexington Books.